

RELATS

GLOBALIZACIÓN Y TRABAJO

CRISIS EUROPEA Y RESPUESTA SINDICAL DESDE LA CES

**Javier Doz, dirigente de CCOO, asesor del secretario
general Ignacio Fernández Toxo
Secretario general de CC OO para su presidencia en
la Confederación Europea de Sindicatos (CES)**

2014

**Elaborado para el GTAS, Grupo de Trabajo sobre
Autorreforma Sindical de CSA**

1. La crisis europea dentro de la crisis mundial

En estos momentos el principal factor que está lastrando la salida de la crisis económica global es la crisis europea que se desarrolla con características propias a partir de comienzos de 2010 y que continúa sin resolverse. La crisis europea, que ha provocado una segunda recesión de la que apenas se está saliendo ahora para instalarse en el estancamiento o en el crecimiento débil, ha sido una crisis motivada por malas políticas económicas y cuyos efectos económicos y sociales están provocando a su vez una crisis política que puede poner en peligro el propio proyecto europeo, la Unión Europea.

La economía mundial evitó su hundimiento y la depresión generalizada porque el G20, en su reunión de Washington de noviembre de 2008, decidió salvar el sistema financiero

internacional a punto de la quiebra con fondos públicos y coordinar la política económica de sus miembros –las economías más desarrolladas y las emergentes- adoptando políticas neokeynesianas de estímulo de la demanda y de relajación monetaria. Eso produjo una salida de la recesión en 2010/11. Pero a comienzos de 2010, la crisis de las finanzas públicas de Grecia, país que representa el 2,3% del PIB europeo, permitió al Gobierno alemán, con el apoyo de los países financieramente más fuertes, dar un giro de 180 grados a las orientaciones del G20 e imponer a toda la UE, en particular a los países del Sur y los más endeudados, los principios de la economía política alemana más conservadora.

La síntesis del ordoliberalismo tradicional de los conservadores alemanes con buena parte de las recetas neoliberales del “consenso de Washington” se concreta en: austeridad fiscal y presupuestaria, contrarreformas estructurales (recortes de prestaciones y derechos sociales y laborales) y devaluación interna para que los países afectados por la recesión, forzada por las medidas políticas, se recuperen supuestamente exportando más en base a la reducción drástica de sus costes laborales.

La “austeridad”: fracaso económico e instrumento de desigualdad

Las consecuencias de estas políticas impuestas por Alemania a través de las instituciones de la Unión Europea (UE) –Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo (BCE)- y la *troika* –Comisión Europea, BCE y FMI- para los países sometidos a rescates financieros son: un fracaso en lo económico, tienen devastadoras consecuencias sociales y unas muy inquietantes derivadas políticas. La UE recayó en la recesión económica en 2012/2013, siendo especialmente severa para los países rescatados: Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, así como para España -cuyo sistema

financiero fue parcialmente rescatado tras manifestarse en parte del mismo la crisis derivada de su implicación en la burbuja especulativa inmobiliaria-, e Italia con un elevado stock de deuda pública.

Cuando se está saliendo de la recesión para iniciar, según las previsiones más generalizadas, una etapa de crecimiento débil o de estancamiento, siempre con escasa creación de empleo, los responsables políticos del desastre tienen el cinismo y la hipocresía de declarar que sus recetas empiezan a funcionar. A los efectos sociales y políticos de los “sacrificios” impuestos a los de abajo nos referiremos más adelante, pero es insostenible ensalzar los logros económicos de la austeridad. Se hubieran conseguido antes y mejor con la política económica que han seguido países como EE UU, Japón o los emergentes añadida a la fortaleza que hubiera proporcionado una política cooperativa y solidaria, de comunitarización de la deuda, en una moneda potencialmente tan fuerte como el euro. Cooperación que, por otra parte, es exigible en cualquier región que tenga una misma moneda.

No entender que la recuperación del crecimiento económico era y es la clave y el objetivo principal, también para la necesaria reducción del déficit y la deuda, ha sido un error brutal. Sólo se entiende porque la opción ideológica de la “austeridad” pretende simultáneamente proceder a una redistribución de la riqueza y del poder en las sociedades europeas sobre la base de debilitar los Estados de bienestar. Para ello se hace necesario reducir los controles democráticos y el poder contractual de los sindicatos. Los poderes financieros y económicos y las élites políticas que les sirven hace ya mucho tiempo que consideraban que los niveles de igualdad y de derechos de las sociedades europeas no servían a sus ansias de acumulación de riqueza y se apartaban demasiado del modelo anglosajón, en el que cada vez aparecía como más

determinante la financiarización de la economía facilitada por la desregulación financiera y la globalización.

La ruptura del contrato social de la posguerra

La “revolución” conservadora, impulsada por Thatcher y Reagan, ya consiguió que el Reino Unido y algún otro país europeo erosionaran sensiblemente las instituciones de sus Estados de bienestar. Pero el impulso de la UE en los 90 –entonces no se percibieron bien sus pies de barro, sobre todo el del proyecto de unión monetaria- paró su generalización. Y por otro lado se incorporaron al modelo de bienestar europeo los países del Sur que, como España, Portugal y Grecia, salían de sistemas políticos dictatoriales. El derrumbamiento del bloque soviético y la posterior incorporación, entre 2004 y 2007, de los países del centro y el este de Europa que habían formado parte de su esfera de influencia y que hicieron una transición rápida al capitalismo, por lo general al modelo anglosajón, dio nuevos acicates al intento de desmontar el Modelo Social Europeo (o sus modelos sociales, si se tienen en cuenta sus diferencias). No se logró entonces, en los 90 y hasta la crisis de 2007, por la resistencia del movimiento sindical en los ámbitos nacionales y por la pervivencia en la UE de la componente social del impulso político de los 90, personificado por líderes como Mitterand y Kohl y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.

La amenaza de una crisis financiera general en la zona euro, la negativa de Alemania y los países ricos a mancomunar los riesgos y garantías y el antikeynesianismo de sus elites económicas hicieron emprender a la UE el camino de la ruptura del Contrato Social sobre el que se asentaron los Estados de bienestar después de la segunda Guerra Mundial, y la propia UE. A las élites políticas y económicas de la posguerra el miedo a que el comunismo de la URSS, potencia vencedora, se extendiera por Europa Occidental y la influencia del New Deal roosweltiano y de

los principios y prácticas de la “economía de guerra”, llevó a negociar con el movimiento sindical y la socialdemocracia un contrato social que implicaba un reparto más igualitario de la riqueza, sectores públicos fuertes, impuestos altos y protección social y servicios públicos universales en buena parte gratuitos.

En los ochenta, las doctrinas de Thatcher y Reagan comenzaron a implantarse, o a influenciar, sustentadas por la rebelión de los más ricos y de una parte de las clases medias que no querían pagar impuestos tan altos (el tipo marginal del impuesto sobre la renta llegó a alcanzar entre el 70% y el 80% de la base imponible para la gente de mayores ingresos en los países nórdicos).

El derrumbamiento del bloque soviético hizo pensar a las élites dominantes que ya no había que tener miedo a la revolución social y que estaban en condiciones de imponer un modelo en el que el reparto de la riqueza les fuera mucho más favorable. La ocasión creen haberla encontrado con motivo de esta crisis.

El proceso no ha sido lineal ni homogéneo en toda la geografía europea ni ha tenido siempre los mismos protagonistas políticos. En Alemania fue un gobierno de coalición de socialdemócratas y verdes, presidido por el canciller Schröder, quien estableció la Agenda 2010 realizando importantes recortes de derechos y prestaciones sociales y dualizando el mercado de trabajo con los *minijobs* (400 euros al mes más asistencia social), de modo que en la potente Alemania de hoy malviven, gracias al todavía generoso “Estado social”, 8 millones de trabajadores pobres, el 20 % de los asalariados. Realizada en contra de la DGB, la central sindical alemana logró salvar de las pretensiones de la patronal los convenios colectivos sectoriales de ámbito nacional y la cogestión de las empresas. La fortaleza de estos dos instrumentos

explica en buena medida el hecho de que la desigualdad social no haya crecido en Alemania durante la crisis, a diferencia de lo ocurrido con la distribución de la renta en la mayoría de los países europeos, en particular en países como España y Grecia.

Falacias sobre el “modelo alemán”

Durante estos años, las patronales y los ideólogos y políticos neoliberales no se han cansado de repetir la falacia de que Alemania ha aguantado mejor la crisis que la mayoría de sus socios europeos porque “hizo a tiempo los deberes” con los recortes sociales y laborales de la Agenda 2010. Nada más falso. Los trabajadores pobres y con menos derechos no están precisamente en su sector exportador. La economía alemana se ha portado mejor durante la crisis, incluso logrando que no aumentara el desempleo en el peor año (2009), cuando su PIB cayó más de un 5%, por las fortalezas tradicionales de su modelo económico y laboral. Sus buenos datos de productividad y su capacidad competitiva en el comercio exterior se fundamentan en sus sistemas de I+D+i y de educación y formación profesional (sistema dual empresa-escuela) y en su buena gestión empresarial y organización del trabajo que no se entienden sin la fortaleza de su negociación colectiva y de la participación de los trabajadores en la empresa (cogestión). Y los trabajadores de los sectores exportadores, protegidos por buenos convenios colectivos, siguieron teniendo salarios más elevados y jornadas de trabajo más reducidas que la mayoría de los trabajadores europeos. Lo que dice mucho de la falacia de la competitividad basada en bajos salarios y peores condiciones de trabajo.

Si, además, el gobierno alemán logra imponer a todos los países de la UE las políticas que benefician a Alemania y perjudican a los Estados con economías más deficitarias, se explica el mejor tránsito relativo de Alemania por la Gran

Recesión. Un par de datos justifican sobradamente lo que acabo de afirmar. En primer lugar, el mantener al euro, a los Estados deficitarios y a la propia UE al borde del abismo durante más de tres años ha proporcionado al Tesoro alemán unas ganancias adicionales de más de 80.000 millones de euros, producto de la bajada de los tipos de interés de su elevada deuda pública, heredera en buena parte de la unificación de Alemania. En el año 2012, sus bonos de deuda a diez años rozaron el 1% de interés y las letras del Tesoro alemán a corto plazo llegaron a venderse con, ¡tasas de interés nominal negativas! El correlato de esta deuda casi gratuita, es que los países del Sur de Europa pagaban entonces unos tipos de interés insostenibles para sus finanzas públicas (hasta un 7,5% pagaba España por su deuda a 10 años a mediados de 2012), al tiempo que se les obligaba a realizar continuos recortes de sus gastos sociales y sus costes laborales.

Un segundo beneficio para Alemania, derivado directamente de la no resolución de la crisis financiera, es la recepción de capitales privados por sus bancos. Aún volátiles en buena parte, el orden de magnitud de los que han recibido Alemania, Holanda, Luxemburgo y Austria, amen de Suiza fuera de la UE, es de cientos de miles de millones de euros. Entre junio de 2011 y el mismo mes de 2012, el período en que España se vio sometida a un mayor acoso por parte de los mercados financieros, salieron de España, según el FMI, 296.000 millones de euros, el 27 % de nuestro PIB.

Procesos similares se han producido en los países europeos más fuertemente endeudados, en sus sectores públicos o/y privados sometidos a un proceso de transformación de la deuda privada en deuda pública. Cuando se han puesto de manifiesto de forma inapelable los errores de construcción del euro sin las condiciones de política económica y fiscal necesarias para tener una

moneda común, el hecho de que el gobierno alemán no tenga ninguna prisa en avanzar hacia el establecimiento de dichos requisitos indispensables tiene una componente de interés material, puro y descarnado.

EE UU, Japón y los emergentes no recayeron en la recesión

Mientras, en Japón y los EE UU así como en los principales países emergentes se ha seguido un camino distinto. Los EE UU han mantenido una política monetaria fuertemente expansiva, que sólo ahora están limitando (y al hacerlo contribuyen eso sí, a crear tensiones monetarias en varios países de América Latina y otros emergentes). En Japón, un primer ministro del conservador PDL, Shinzo Abe, quiere sacar a su país del prolongado estancamiento aplicando políticas claramente keynesianas de impulso de la demanda y de relajación cualitativa en lo monetario (léase fabricar dinero).

Los países no europeos del G20 (desarrollados y emergentes) prosiguieron en términos generales, aún con diferencias entre ellos, con las orientaciones neokeynesianas de las cumbres de 2008 y 2009, no recayeron en la recesión y sus economías volvieron a crecer. Si la recuperación mundial no está consolidada y el fantasma de la peor crisis vivida en tiempos de paz desde la Gran Depresión no se ha alejado, se debe tanto a los persistentes riesgos del sistema financiero (los ocultos y no resueltos de antes de la crisis y los nuevos del volver a las andadas en el marco de las insuficientes nuevas regulaciones) como al lastre de la recesión en W y las perspectivas de débil crecimiento de las economías de la UE. No olvidemos que Europa suma todavía el mayor PIB del mundo.

Después de haber inutilizado en gran medida el G20, a partir de la Cumbre de Toronto (junio de 2010), los

responsables políticos de la UE se permitieron el penosísimo espectáculo de escenificar la apoteosis del rigor en la política de austeridad y del castigo público no democrático a los que se apartasen de ella en la cumbre del G20 de Cannes (noviembre de 2011). La eclipsaron por completo convocando en paralelo una cumbre extraordinario del Consejo Europeo de la que salió el triste episodio de la dimisión del primer ministro griego, Yorgos Papandréu, al ser obligado a renunciar al referendum que había anunciado para que el pueblo heleno votara las durísimas condiciones del 2º plan de rescate de la *troika*.

Consecuencias sociales de la “austeridad” y las contrarreformas

Después de haber sido “rescatada” en dos ocasiones y haber sido reestructurada su deuda y haberse beneficiado de una quita de 100.000 millones de euros, hoy la deuda pública griega se acerca al 180 % del PIB, unos 330.000 millones de euros. Es decir: es impagable, más aún si se continúa obligando a Grecia a proseguir con los ajustes presupuestarios y las devaluaciones salariales.

Pero las consecuencias sociales de los memorandos de condiciones de los rescates de la *troika* son aún mucho más devastadoras que el desastre económico generado. Grecia perdía ya, en 2013, el 25% de su PIB y la renta disponible de las familias había disminuido en un 40%, en comparación con los datos de 2007. Si descontamos los tiempos de guerra no se conoce una caída tan brutal incluidas las de la Gran Depresión en la mayoría de los países. La pobreza alcanza a 3,8 millones de personas, el 35 % de la población. El deterioro de los servicios públicos, en particular de la sanidad y la educación, ha sido brutal. La sanidad pública ha dejado de ser universal y ha caído la esperanza de vida de los griegos. De los muchas situaciones que crónicas y análisis cuentan sobre la

degradación social a la que han sometido al pueblo griego unas políticas tan equivocadas como inhumanas mencionamos dos: cientos de miles de familias no pueden pagar los recibos de la luz por lo que para calentarse se vuelve a utilizar masivamente la madera lo que ha producido un peligrosísimo aumento de la contaminación en las grandes ciudades amen de una incontrolada tala de árboles. La segunda es la detección por los maestros de numerosos casos de desnutrición infantil entre los alumnos de las zonas más pobres.

Y en España...

Desde que comenzó la crisis, en 2008, en España se han destruido 3.718.700 empleos, de los cuales 1.887.700 lo han sido desde 2010, cuando comienzan a aplicarse las políticas de austeridad. De estos últimos, 1.049.300 lo han sido desde que el PP se hace cargo del gobierno a finales de 2011. Al terminar 2013 había en España 5.896.380 personas en paro, el 26,03 % de la población activa¹. De ellas, cerca de 2,9 millones no cobraban prestaciones por desempleo. El número de familias con todos sus integrantes en paro asciende a 1,8 millones.

El aumento del desempleo, y los recortes sociales y laborales han producido un alarmante incremento de la pobreza y la desigualdad. La pobreza (la relativa, cuando los ingresos son inferiores a la mitad de la renta media per capita) afecta al 28 % de la población, es decir a 13 millones de personas. La pobreza severa, que va acompañada de desnutrición en bastantes casos, a 3 millones. Llama la atención el crecimiento de la desigualdad a una velocidad desconocida en la historia de las estadísticas. El cociente “20/20”, resultado de dividir la renta del 20% más rico de la población por la que tiene el

¹ Todas las cifras provienen de las series estadísticas de población ocupada (del 4º trimestre de 2007 al 4º trimestre de 2013) de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística del 4º trimestre de 2013 (EPA-INE)

20% más pobre, creció de 5,3 a 7,5 entre 2007 y 2011, haciendo que España haya pasado de estar en la zona media de la clasificación de la desigualdad social en Europa a ser el país más desigual a excepción de Letonia. Por todas las variables que influyen en la confección de esta media, cuando se conozcan los datos actualizados de finales de 2013, la desigualdad habrá vuelto a crecer.

El deterioro social europeo tiene excepciones

El deterioro económico y social ha afectado a una mayoría de países pero con un grado muy diferente lo que ha hecho aumentar la divergencia económica y social entre los Estados que conforman la UE. Alemania, Austria y los países nórdicos han aguantado mucho mejor la crisis. Polonia, cuyo PIB ha sido de los pocos que no ha decrecido debido en parte a las ayudas recibidas de los fondos de la UE, tiene sin embargo 2,5 millones de trabajadores con salarios de miseria. La política interior de la canciller Merkel ha procurado mantener la cohesión interna de la sociedad alemana al tiempo que su política europea la ha deteriorado gravemente en los países periféricos. El *Kurzarbeit* (reducción de la jornada y el salario con percepción de la parte correspondiente del seguro de desempleo), pactado con la DGB, ha permitido el mantenimiento del empleo. Apenas subió el desempleo cuando el PIB alemán cayó, en 2009, más de un 5 %.

Lo que no hizo el Gobierno de Merkel es promover la subida de los salarios y la demanda interna para ayudar, así, a la recuperación de las economías europeas como le pedían, además de la CES, muchos gobiernos y economistas, incluso instituciones como el FMI. Ni siquiera ahora, el programa de gobierno de la coalición entre socialdemócratas y democristianos va a hacerlo de modo significativo. El establecimiento de un salario mínimo interprofesional de 8,50 euros la hora, de modo gradual, y ciertas mejoras para algunos colectivos de pensionistas

van a tener un impacto limitado, lo mismo que los reducidos compromisos de inversión pública. No obstante, es relevante el establecimiento de un salario mínimo interprofesional en Alemania porque inicia una vía que puede permitir corregir los peores efectos de la reforma de 2002 en el mercado de trabajo.

¿Donde se fragua la crisis europea?

Una parte del sistema bancario europeo, contagiado por las malas prácticas que tenían su epicentro en Wall Street y por la debilidad de las regulaciones públicas de los mercados, ha tenido que ser rescatado de su situación de quiebra por las finanzas públicas de los Estados. Esto y las malas políticas presupuestarias y fiscales de algunos Estados generaron la crisis de las deudas soberanas que tuvo su primer estallido en la crisis griega de principios de 2010. Pero su agudización y generalización, que han llegado al punto de haber puesto en grave riesgo la misma existencia del euro, vinieron de la mano de las tardías y malas respuestas a la misma que tienen unos orígenes claramente políticos.

En primer lugar, la Unión Monetaria -y su expresión, el euro- se pusieron en marcha sin cumplir ni de lejos las condiciones que toda zona monetaria común deben reunir para ser consideradas como “óptima”: un Banco Central con competencias fuertes (como las de la FED norteamericana); una regulación financiera común con instrumentos de control y garantías (unión bancaria), políticas fiscales armonizadas; y, una coordinación fuerte de las políticas económicas.

En segundo lugar, los mecanismos de toma de decisiones de la UE amén de poco democráticos son complejos y lentos. Esta dificultad se ha agudizado cuando el centro de gravedad del poder se ha desplazado definitivamente de la

parte común –la Comisión Europea- a la parte intergubernamental –El Consejo Europeo-, en donde Alemania ha podido imponer políticamente su visión y sus intereses nacionales a partir de su hegemonía económica.

También hay que tener en cuenta que la UE realizó su ampliación, de 15 a 27 países, en la primera década del Siglo XXI profundamente lastrada por el agotamiento de su proyecto político y el renacimiento de los nacionalismos flanqueados por tendencias políticas que aunque minoritarias no han dejado de ejercer su influencia: extrema derecha, xenofobia, racismo y fundamentalismos religiosos. Si la ampliación fue cantada por bastantes como la “reunificación de Europa” tras las dos guerras mundiales y la Guerra fría, el modo y circunstancias de la integración de los países del centro y el este –influenciados por el neoliberalismo postcomunista de su veloz tránsito del socialismo real al capitalismo-, a una UE sin liderazgo y con su proyecto político agotado, no ha aportado fortaleza sino más bien dilución y avance de la corriente que ve a la UE sobre todo como un mercado. Más mercado y menos cohesión. Retroceso hacia el intergubernamentalismo y alejamiento de cualquier perspectiva federalista.

La divergencia económica fue parcialmente compensada por el mecanismo de redistribución de los fondos estructurales y de cohesión y tapada por los procesos especulativos financieros e inmobiliarios. Hasta que estalló la crisis.

¿Avances en el gobierno económico o imposición no democrática de los intereses de los países acreedores?

La imposición de las políticas de austeridad, contrarreformas estructurales y devaluación interna -de los países más endeudados y con “desequilibrios macoeconómicos graves”- se ha hecho en paralelo al establecimiento de sistemas y normas de coordinación

fuerte y “*gobernanza*” en materia de política económica. La jerga *eurocrática* se llenó de nuevos términos y expresiones como: “*two pack*”, “*six pack*”, “semestre europeo”, “planes de reforma nacionales” y “recomendaciones por país”, “*fiscal compact*”, etc. Este último, el de mayor rango jurídico, es un nuevo tratado, llamado “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria”. Fue suscrito por todos los Estados miembros de la UE con excepción del Reino Unido y la República Checa.

El nuevo Tratado consagra algunos de los principios ideológicos de la economía política alemana más conservadora. En particular, al obligar a los Estados miembros a introducir en sus constituciones o en normas jurídicas de nivel equivalente, la llamada “regla de oro del déficit cero”, por la cual no podrán incurrir en tal supuesto delito en materia de política presupuestaria. El feroz antikeynesianismo de esta norma es sumamente inconveniente además de ser de cumplimiento imposible en bastantes ocasiones, El resto del Tratado versa sobre el modo de arrebatar la soberanía a los Estados con déficit en materia de política presupuestaria. Se la quita a los gobiernos y a los parlamentos nacionales y se la da a la Comisión Europea, vigilada por el Consejo, sin participación alguna del Parlamento Europeo. Es decir, la nueva norma es también profundamente antidemocrática. El esquema de la nueva “*gobernanza económica europea*” no responde sino a un esquema de control de las finanzas de los países endeudados por sus acreedores.

Algunos europeístas se consuelan de forma completamente acrítica afirmando que así se está avanzando algo en la construcción de un gobierno económico, cosa que era necesaria. Prescinden del hecho de que los contenidos de las políticas condicionan enormemente el sentido jurídico-político de las nuevas

normas y su carácter no democrático. Y, por otra parte, se prescinde de crear lo que hubiese sido imprescindible tener desde el establecimiento del euro: un Tesoro único, con capacidad de emitir deuda común (eurobonos), un Banco Central Europeo con competencias similares a las de la FED, una política fiscal armonizada que evite el dumping fiscal, etc. Incluso, los tímidos avances hacia una Unión bancaria que ahora mismo se están debatiendo, son parciales, tardíos y dejan de lado aspectos esenciales como un Fondo de Garantía europeo con una capacidad suficiente para hacer frente a nuevas crisis.

A la oposición tradicional del Reino Unido y los países nórdicos a avanzar en el fortalecimiento político de la UE se ha unido en todo este período el “no” sistemático de Alemania a todo lo que supusiera, en sus palabras, “una unión de transferencias” (de los más ricos a los más pobres), que en la práctica no es sino el “no” sistemático a todo lo que sea construir los imprescindibles lazos de solidaridad (solidaridad basada en el interés mutuo, todo sea dicho) de un proyecto como es la UE y su Unión Económica y Monetaria.

En el momento en el que el fracaso de las políticas de austeridad era ya una evidencia, y habían arrastrado a Europa a una segunda recesión, el Consejo Europeo, en su cumbre de junio de 2012, realizó una operación puramente propagandística para aparentar que también se preocupaba del crecimiento y el empleo con políticas compensatorias de la austeridad. Dibujaron sobre el papel un Plan de crecimiento y empleo sin contenidos y sin financiación nueva. Los 120.000 millones de euros anunciados, el 1% del PIB europeo aproximadamente, o eran fondos para inversiones del Presupuesto Plurianual 2007-2013 no gastados cuando más necesario hubiera sido hacerlo, o reflejaban en el papel una hipotética capacidad crediticia basada en el apalancamiento del Banco Europeo de

Inversiones (BEI). Casi dos años después del anuncio del “plan compensador” no se ha ejecutado nada del mismo. Un mini plan de empleo juvenil, dotado con 6,000 M€, derivado del Plan anterior, tampoco conoce al día de hoy, ninguna realización concreta. Pues bien, este miniplan fue debatido y aprobado nada menos que en seis cumbres, formales o informales, de jefes de Estado y de gobierno de la UE. Esta es otra faceta de la insoportable forma de “gobernanza económica” que padece la UE. La de la “venta de humo” en continuas operaciones de imagen que intentan preservar inútil y falsamente la deteriorada imagen de gobernantes e instituciones.

La crisis del proyecto político europeo

El fracaso de las políticas de austeridad, sus consecuencias sociales tan profundamente injustas, las marcadas divergencias internas y entre países que han producido, han tocado muy seriamente el proyecto político europeo. Sin confianza y sin solidaridad entre los sujetos que se embarcan en un proyecto político, supranacional, como éste o como otro diferente, el proyecto está condenado al fracaso. Éste es el gran riesgo que actualmente vive la UE. La cohesión entre sus Estados está resquebrajada y ausente una voluntad clara de restaurarla. La desconfianza de la ciudadanía en la UE y sus instituciones es creciente y hoy ampliamente mayoritaria. En España hemos pasado de una adhesión del 70% en las encuestas (una de las más elevadas de Europa) a una desconfianza del 80 %, también de las más altas.

Por esto, porque la situación que vivimos es fruto de la superposición de una crisis económica severa con unas erróneas políticas para enfrentarla y una “arquitectura” Europa inadecuada, la crisis europea es, ante todo, una crisis política.

Una de sus manifestaciones es el auge de las opciones euroescépticas, xenóforas, nacionalistas y de extrema derecha. Con organizaciones políticas que recogen ese voto de un modo importante en países como Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Hungría, Rumania, Bulgaria, etc, o Suiza, país asociado a la UE. Y con la capacidad de influir en la agenda y las propuestas de los partidos conservadores y aún de los de centro izquierda en temas sensibles como inmigración, derecho de asilo, libre circulación interna (uno de los pilares de la UE) o sobre cualquier propuesta que implique un reforzamiento de las competencias y de la democracia en la UE.

Una situación así no se puede mantener por mucho tiempo. No me cabe la menor duda de que hay que volver a repensar Europa, al mismo tiempo que hay que actuar con rapidez y decisión para atajar los problemas más urgentes para salir de la crisis, restaurar el crecimiento y crear empleo.

2. La respuesta del movimiento sindical a la crisis europea

En 2011, CCOO llevó al Comité Ejecutivo de la CES una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo, afirmando que el “contrato social europeo”, aquel acuerdo implícito y multiforme sobre el que se construyeron los Estados de bienestar europeos después de finalizar la 2ª Guerra Mundial y que fue uno de los pilares –también implícito- de la construcción de la UE, había sido roto por las actuales élites políticas y económicas. Esta es una de las dimensiones profundas de lo que está ocurriendo en Europa.

La reflexión fue bien acogida, lo mismo que su correlato

propositivo: hay que construir un **“nuevo contrato social europeo”**. Esta es una de las propuestas que la CES formuló en 2012² y que incluye diversas orientaciones programáticas y de acción relativas a la negociación colectiva (resaltando la autonomía de los interlocutores sociales) y el diálogo social, el pilar social de la arquitectura político jurídica de la UE (“Cláusula social de progreso”), la preservación de los derechos sociales y los servicios públicos, etc.

Cuando la segunda recesión se abatió sobre la mayoría de las economías de la UE y los responsables políticos europeos continuaban insistiendo en las ideas fijas de austeridad - “reformas” estructurales - devaluación interna, compensadas ficticiamente por los falsos planes de crecimiento y empleo, el ejecutivo de la CES formuló una propuesta potente y rigurosa para salir de la crisis y cambiar el modelo de crecimiento: su **Plan europeo de inversiones**³. La propuesta había sido impulsada por los sindicatos del “Grupo latino”⁴ y la DGB. Con anterioridad, hacia finales de 2012, la central alemana había hecho público un documento titulado **“Un nuevo Plan Marshall para Europa”**.

Este documento, que es una prueba de que en Alemania existen fuerzas sociales que en absoluto comparten las posiciones conservadoras de su gobierno, defendía la adopción de un Plan de inversiones financiado por la UE, mediante endeudamiento común, con el propósito de salir de la crisis, crear empleo y cambiar el modelo productivo hacia una economía verde. Acompañado de una memoria económica rigurosa, la financiación del plan contemplaba

² “Un Contrato social para Europa”, aprobado por el Comité Ejecutivo de la CES el 5 de junio de 2012.

³ “Plan de recuperación para un crecimiento sostenible y empleos decentes”, aprobado por el Comité Ejecutivo de la CES el 7 de noviembre de 2011.

⁴ El Grupo latino es una agrupación informal de sindicatos que procuran coordinar sus propuestas en el interior de la CES. Está formado por las centrales sindicales representativas que son miembros de la CES en Francia, Italia, España, Portugal, Grecia y Bélgica.

una inversión de unos 250.000 millones de euros anuales (un 2% del PIB europeo) durante diez años.

La propuesta de la CES recogió lo sustancial del plan de la DGB, tanto en la cuantía de la inversión como en el procedimiento de apalancamiento para conseguir la financiación necesaria (que equivale al doble del presupuesto ordinario europeo durante los diez años de vigencia). Hace del Banco Europeo de Inversiones, sujeto a las directrices de un organismo *ad hoc* en el que los interlocutores sociales participarían, un instrumento principal para la ejecución del plan. Para la financiación del capital inicial y el establecimiento de las garantías necesarias se utilizarían eurobonos, los ingresos derivados de un impuesto a las grandes fortunas y la garantía del BCE. La propuesta de la CES diversifica los ámbitos de la inversión, en relación con los contenidos de la propuesta de la DGB, preconizando que se desarrollen en los siguientes sectores: energía (generación y distribución); red e infraestructuras de transporte y redes europeas; educación y formación profesional; expansión de redes de banda ancha; desarrollo industrial (apoyo a las PYMES, eficiencia energética y eficiencia de recursos, préstamos a bajo interés, programa de microcréditos, etc.); servicios públicos y privados (por ejemplo: renovación urbana, salud y bienestar); infraestructuras y vivienda para las personas mayores; vivienda social; y promoción de una gestión del agua sostenible. La memoria económica del Plan de la CES estima que la creación de empleo inducida sería del orden de los 11 millones.

La CES, por lo tanto, ha hecho un esfuerzo de elaboración de propuestas de carácter europeo. No es exagerado decir que, a pesar de las diferencias internas, a pesar del diferente grado de compromiso con la profundización del proyecto político europeo de los sindicatos de nuestro continente, hoy es la fuerza organizada europea, política o

social, que mantiene un más alto grado de cohesión programática en Europa.

La movilización sindical europea

Desde el comienzo de la crisis ha habido un serio intento `por parte de la CES de dar una respuesta supranacional europea, primero a la crisis y sus consecuencias en la destrucción de empleo y el deterioro de las relaciones laborales y después, a partir de 2010, directamente enfrentada a las políticas de austeridad y recortes sociales y laborales que se promovían por las instituciones políticas europeas bajo la batuta del gobierno alemán.

Desde 2009 se han producido en los países de la UE el mayor número de movilizaciones sindicales masivas, incluidas huelgas generales, desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. Ha habido nada menos que 36 huelgas generales con un seguimiento importante en casi todas ellas. Bien es verdad que 23 de las mismas se han producido en Grecia. También las ha habido en Italia, España, Portugal, Bélgica y, por primera vez desde 1926, los empleados públicos británicos fueron a una huelga general contra la reforma de su sistema de pensiones. En Francia se desarrollaron once jornadas de movilización general (manifestaciones masivas y huelgas en el sector público) contra la reforma de las pensiones de Sarkozy. Jornadas de manifestaciones (nacionales o descentralizadas) se han realizado numerosas veces en todos los países mencionados y además en Alemania, Holanda, Irlanda, Rumania, Polonia, Bulgaria, República Checa, Hungría, Eslovenia, Suiza, etc.

Y ha habido euromanifestaciones y jornadas de acción europeas descentralizadas. Siete en total en el período que comentamos, a la que se sumará la convocada el próximo 4 de abril, con una manifestación europea en Bruselas y acciones en otros países. Las más importantes, a mi juicio, las cuatro euromanifestaciones que agrupando cada una

de ellas a trabajadores de varios países limítrofes se celebraron en mayo de 2009 en Madrid, Bruselas, Praga y Berlín, y la Jornada de acción y solidaridad europea del 14 de noviembre de 2012. En este día confluyeron cuatro huelgas generales nacionales (Portugal, España, Italia y Grecia) con otras movilizaciones que tuvieron lugar en un total de 28 países. Ha sido, hasta el momento, el punto más alto de acción común coordinada contra las políticas de austeridad y sus múltiples repercusiones en cada uno de los países. Fue posible porque el llamamiento realizado por el Comité Ejecutivo de la CES fue precedido por un trabajo de coordinación previo entre las centrales sindicales de los países que más estaban sufriendo las consecuencias de dichas políticas.

A pesar de este esfuerzo por desarrollar una acción sindical transnacional, de cara a crear una correlación de fuerzas europea favorable a los trabajadores que parase o limitase las políticas europeas que tan negativamente afectaban a los intereses y derechos de los trabajadores en cada Estado, hay que reconocer que el grueso de las movilizaciones se ha desarrollado en los ámbitos nacionales y que, a pesar de la formulación de propuestas alternativas (nacionales y europeas), su carácter ha sido principalmente defensivo. Algunos objetivos limitados se han logrado, en ocasiones a través de recursos jurídicos complementarios a las luchas –como en Portugal y España-, pero hay que reconocer que no se ha conseguido torcer el rumbo de la política europea en el período 2010-2013. Es cierto que han contribuido a que en estos momentos se vaya abriendo camino la idea de que no es sostenible la continuidad de las políticas de austeridad.

El que las movilizaciones transnacionales, que siempre tienen que ser construidas mediante la articulación de objetivos y dinámicas nacionales con las de carácter europeo –proceso sumamente difícil-, no hayan tenido una

mayor grado de generalización en el mapa europeo, se debe en una medida importante a que la incidencia de tales políticas en las condiciones salariales y de trabajo de los trabajadores del continente ha sido muy diferente. En Alemania, Austria o los países nórdicos los trabajadores no han sufrido un deterioro grave de su situación en estos años, menos aún en el grado tan alto que se ha padecido en Grecia, Portugal, España, Italia o en varios países del Este de Europa. Además, las tradiciones de movilización del sindicalismo europeo varían mucho según los países.

Sobre la mucha experiencia acumulada, el sindicalismo europeo, que sigue siendo el que tiene una mayor densidad sindical y fuerza en el mundo, tiene que hacer una reflexión muy seria sobre la necesidad de construir un auténtico “sindicato europeo” y hacerla en relación con el modelo de Europa que quiere.

En esto último entramos de lleno en el campo de la política, imprescindible cuando las leyes y los modos de gobernar se transnacionalizan, por la globalización y los procesos de integración regionales de los que Europa sigue siendo el exponente más avanzado.

En lo inmediato, el sindicalismo europeo tiene que seguir luchando con perseverancia por hacer avanzar sus propuestas para salir de la crisis y restaurar o/y reforzar el modelo social europeo. Tiene que hacerlo desde sus propias fuerzas y con una política de alianzas coherente, realizada tanto con partidos políticos como con organizaciones y movimientos sociales, procurando la articulación de las alianzas nacionales con las de ámbito europeo.

Finalmente hay que ser conscientes de que el actual modelo de Unión Europea ya no sirve. Que es necesario ir a una refundación política de Europa, que establezca un

sólido pilar social, garantizado jurídicamente por los Tratados y que democratice el funcionamiento de la UE, empezando por su gobierno económico, imprescindible para la Zona euro. Estas ideas tienen que desarrollarse y transmitirse de un modo constructivo, que preserve la idea de la necesidad de la Unión Europea.

Esta refundación política, en clave democrática, tiene que conjurar el riesgo, hoy ya presente, de consolidación de una Europa en la que se enseorea una suerte de capitalismo autoritario, alérgico a la participación de la ciudadanía. Su modelo final sería un modelo federal de Estados Unidos de Europa. Su construcción, requiere un proceso democrático y participativo a través de una Convención constituyente. El sindicalismo europeo, su fuerza organizada, la CES, sería sólo obviamente una de las fuerzas del proceso. Pero una fuerza necesaria que puede y debe dar coherencia supranacional al nuevo proyecto, porque sabe que esta Europa ya no sirve pero sigue convencido de que Europa es imprescindible